

La Construcción de la Democracia Sinaloense.

Partidos, elecciones y reformas
(1977-2007)

*“... por sí sola, la democracia no puede resolver nuestros problemas.
No es un remedio sino un método para plantearlos y
entre todos discutirlos”¹.*

Octavio Paz.

La democracia en México, entendida ésta como régimen de gobierno, esto es, atendiendo al enfoque formal y desplazando al enfoque sustantivo, se instauró a partir del inicio de la llamada transición a la democracia; que para fines prácticos debe considerarse como el proceso que inició con la reforma electoral de 1977, y culminó con las elecciones de 1997²; y que dejó atrás un sistema de corte autoritario³ y de partido hegemónico⁴ con elecciones meramente rituales para dar paso a un sistema pluralista con comicios confiables y competitivos. Como consecuencia, el avance hacia una auténtica pluralidad se ha ido gestando en las urnas, espacio donde las distintas fuerzas políticas han logrado una expansión de posiciones de gobierno en los planos federal y local.

Sin embargo, la transición de México a la democracia se ha vivido con ritmos diferentes en las entidades federativas⁵. En este sentido, el desarrollo de la democracia sinaloense presenta características propias. Se trata de un estado que no ha tenido

¹ Paz, Octavio (2001), “Hora cumplida (1929-1985)”, en *Octavio Paz. Sueño en libertad. Escritos políticos*, selección y prólogo de Yvon Grenier, Seix Barral, México, p. 207.

² Tesis central de Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldenberg (2000), *La Mecánica del Cambio Político en México. Elecciones, partidos y reformas*, Cal y Arena, México.

³ Nohlen, Dieter (2004), *Sistemas electorales y partidos políticos*, tercera edición, Fondo de Cultura Económica, México.

⁴ Sartori, Giovanni (2005), *Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis*, trad. Fernando Santos Fontenla, segunda edición ampliada, Alianza Editorial, España.

⁵ Véase Peschard, Jacqueline (Coord.) (2008), *El federalismo electoral en México*, Miguel Ángel Porrúa/Cámara de Diputados/UNAM, México.

alternancia en el ejecutivo estatal, una posición dominada por el PRI, a diferencia de la experimentada en el ejecutivo federal en el año 2000; con un Congreso donde la presencia de la oposición es prácticamente inexistente; y que además sólo ha gobernado un número reducido de ayuntamientos, en períodos esporádicos.

Lo anterior apoyado en la idea generalizada de la alternancia como condicionante lógica de la llegada de una democracia auténtica y madura, invita a inferir que la democracia en Sinaloa se antoja inexistente. No obstante, es fundamental señalar la posibilidad de alternancia sin democracia, y de democracia sin alternancia. En este sentido Bovero puntualiza que “el criterio mínimo formal mediante el cual se distingue una democracia de una no-democracia está representado por el sufragio universal, libre y secreto”⁶. Y que “lo que realmente es connatural a la democracia no es el que ocurra el cambio en el vértice político-institucional, sino más bien, la posibilidad concreta de que ello ocurra, no tanto la alternancia real, actuada, sino más bien la alternancia posible, eventual. La transición democrática es una prueba de que esa posibilidad existía concretamente antes de que se realizara”⁷, esto es, la existencia de condiciones de equidad en la contienda y garantías para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.

En este sentido Robert A. Dahl, enuncia seis instituciones políticas, que en conjunto, distinguen a los regímenes democráticos modernos o *poliarquías*⁸ y que han sido aceptadas con beneplácito por la comunidad académica como parámetros en las gradaciones de la caracterización democrática como: *cargos públicos electos*;

⁶ Bovero, Michelangelo (2000), *Democracia, alternancia, elecciones*, IFE, México, p. 12.

⁷ *Ibíd.*, p. 15.

⁸ Se deriva de las palabras griegas que significan “muchos” y “gobierno”. Dahl lo introdujo en 1953 para referirse a una democracia representativa moderna con sufragio universal.

*elecciones libres, imparciales y frecuentes; libertad de expresión; acceso a fuentes alternativas de información; autonomía de las asociaciones; y ciudadanía inclusiva*⁹.

Resuelta la cuestión antes expuesta, es posible entonces, realizar un análisis del desarrollo de la democracia en Sinaloa que permita conocer con detalle los avances experimentados tomando como punto de partida las dos piezas fundamentales de todo sistema político: el sistema electoral y el sistema de partidos¹⁰.

Es importante mencionar que todo desarrollo tiene un punto de partida, que se convierte en la referencia obligada para medir gradualmente los avances, los retrocesos, o el estancamiento en distintos momentos. Por lo cual, en esta ocasión el estudio del desarrollo democrático en Sinaloa habrá de realizarse bajo algunos elementos del esquema de las transiciones de O'Donnell, Schmitter y Whitehead (régimen autoritario- transición (liberalización- democratización)-consolidación)¹¹; ante la imposibilidad que representa para toda ciencia social la adopción de modelos estrictos de explicación, y atendiendo a la particularidad que representa el subsistema político sinaloense. De esta manera, se hace un esfuerzo por acotar las fases de dicho esquema con base en la evolución de las instituciones políticas y las reglas electorales de la entidad.

El autoritarismo en Sinaloa. De los gobiernos post-revolucionarios a 1976.

A principios del siglo XX e inserta en una realidad nacional caracterizada por los altos niveles de inestabilidad política, Sinaloa, experimenta un conjunto de condiciones

⁹ Dahl, Robert A. (2006), *La democracia. Una guía para los ciudadanos*, Trad. Fernando Vallespín, Taurus, México, p.100-101.

¹⁰ Nohlen, Dieter (2003), *El contexto hace la diferencia: reformas constitucionales y el enfoque histórico-empírico*, segunda edición., UNAM, México.

¹¹ O'Donnell, Guillermo, et al. (1988). *Transiciones desde un gobierno autoritario*. Ed. Paidós. Argentina.

adversas para las mayorías como la deficiente remuneración del trabajo, el despojo de las comunidades indígenas, el acaparamiento de las tierras en pocas manos y un gobierno represivo y despótico”¹²; catalizadores suficientes para tomar trinchera en la lucha armada de 1910.

Al término de dicho movimiento sobrevino el problema de la transferencia del poder político, por lo que se crearon mecanismos para institucionalizar la lucha por el mismo; dejando atrás las vías violentas e inaugurando mecanismos de civilidad y consenso, convirtiendo a las elecciones en el único camino de legítimo acceso ante la centrifugación de las fuerzas revolucionarias y su arraigo en distintos puntos geográficos del país en la figura de los caudillos. De esta manera, se gestó un instituto político fuerte, capaz de aglutinar las fuerzas dispersas enarbolando los principios de la revolución, a quien corresponde la cadena evolutiva PNR-PRM-PRI. Bajo este esquema se preparó el paso del caudillismo al presidencialismo que, “... debía corresponder a la eliminación o la transformación del carisma del caudillo, fundado en el poder de hecho, para que el poder se institucionalizara como presidencialismo constitucional”.¹³

En sincronía con el proyecto político de Elías Calles, “en Sinaloa el PNR inició formalmente sus trabajos en el mismo mes y año que surge en el ámbito nacional. Filiberto Mora y Ochoa fue el primer presidente del Comité Directivo Estatal, de 1929 a 1930”¹⁴. No obstante, la disolución de las tradiciones de poder fuertemente arraigadas seguía constituyendo una tarea inconclusa para el régimen naciente; “los caciques regionales propiciaron que los movimientos sociales y los partidos políticos se

¹² Ortega Noriega, Sergio (1999), *Breve Historia de Sinaloa*, FCE-Colegio de México, México.

¹³ Córdova, Arnaldo (1972), *La Formación del Poder Político en México*, Era, México, p. 53.

¹⁴ García Ramírez, Guadalupe y Gutiérrez, Jesús Ramón (2004), *Partidos políticos y movimientos sociales en Sinaloa, 1929-1940*, CEE-UAS, México. p. 73.

manifestaran en la región, ya sea enarbolando demandas de los sectores que representaban su base de sustentación, o bien ofreciendo un programa político y de desarrollo para Sinaloa”¹⁵.

El resultado de estos esfuerzos de unificación y perpetuación del poder fue la edificación del binomio gobierno-partido oficial; que culminaría en una variante de autoritarismo denominado partido hegemónico, el cual “no permite una competencia oficial pot (sic) el poder, ni una competencia de facto. Se permite que existan otros partidos, pero como partidos de segunda, autorizados; pues no se les permite competir con el partido hegemónico en términos antagónicos y en pie de igualdad. No sólo no se produce de hecho la alternación; *no puede* ocurrir, dado que ni siquiera se contempla la posibilidad de una rotación en el poder. Esto implica que el partido hegemónico seguirá en el poder tanto si gusta como si no”¹⁶.

Quizá la descripción más precisa de la estampa autoritaria se encuentra en los trabajos de Sartori, quien antaño aseverara que “México está gobernado por su presidente de manera que recuerda al dictador de tipo romano. Como dice un autor, <<los mexicanos evitan la dictadura personal al retirar a sus dictadores cada seis años>> (...) Y las normas del juego son muy claras. El PRI tiene que ganar de todas formas. Si existe alguna duda acerca del margen de victoria que necesita el PRI, se da pucherazo o se destruyen las urnas. Por otra parte, <<si fracasa la cooptación de los grupos disidentes, entonces es probable que se recurra a la represión>>”.¹⁷

¹⁵ *Ibíd.*, p. 129.

¹⁶ SARTORI, Giovanni, *Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis*, trad. Fernando Santos Fontenla, segunda edición ampliada, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 286.

¹⁷ *Ibíd.*, pp. 286-288.

Si pudiésemos establecer una cronología de la vida política en el país, tenemos un primer período que comprende de la conclusión de la revolución a 1929 caracterizado por una atomización extrema de la vida partidista. Un segundo lapso de 1929 a 1968 distinguido por una prolongada centralización estatal y de negociación social a favor del PRI. Luego, como tercer período, se ubica la década de crisis política y de representación posterior a 1968, en la cual la vida partidista y electoral no tiene correspondencia con la dinámica de la realidad mexicana en los ámbitos social y político.

Sin lugar a dudas es este segundo período (1929-1968) donde se produce un auge en la formación del régimen autoritario mexicano, entendido éste en palabras de Linz como “... sistemas políticos con un pluralismo político limitado y no responsable; sin una ideología elaborada y directora (pero con una mentalidad particular); sin una movilización política intensa o vasta (excepto en algunos momentos de su desarrollo); y en los que un jefe (o tal vez un pequeño grupo) ejerce el poder dentro de límites que formalmente están mal definidos pero que de hecho son fácilmente previsibles”¹⁸.

De allí que la adopción de la posición de árbitro por encima de las conflictividades entre grupos sociales; la cooptación como medio de reclutamiento de las élites políticas; el mando militar; el control y la represión ejercidos con eficacia; la distribución de recompensas a las lealtades; y claro está el corporativismo, se convirtiesen en la columna vertebral del régimen, asegurando su preservación casi indefinida. Se trataba de una maquinaria bien aceiteada, y de funcionalidad probada; que se iría desgastando a la par de los acontecimientos y que culminaría con el desmembramiento de la misma.

¹⁸ Linz, Juan (1974), “Una Teoría del Régimen Autoritario. El caso de España”, en Fraga, M., et al., *La España de los 70*, vol. III, El Estado y la Política, Moneda y Crédito, España, p. 1474.

Es importante puntualizar que en Sinaloa se estaba reproduciendo un modelo de autoritarismo con características idénticas a las instauradas a nivel nacional, como: “un sistema electoral que favorece la preeminencia de un partido gobernante sobre el resto de las formaciones que suben a la palestra pública en condiciones de escasa competencia política; un sistema de partidos escasamente representativo de la sociedad sinaloense; y la acción indirecta o directa del Ejecutivo en la estructura, proceso y calificación de las elecciones”¹⁹; haciendo de este subsistema político uno de los más fértiles para el arraigo de las prácticas autoritarias, cuyos referentes más nítidos se encuentran en los períodos de gobierno de Alfredo Valdez Montoya²⁰, contenedor del movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y de Alfredo G. Calderón Velarde²¹ que en conexión con el gobierno sucesor de Antonio Toledo Corro²², enfrentaron las convulsiones de los movimientos obrero-agrícolas en el estado.

Lo anterior no es más que el resultado de la proliferación del poder con trayectoria centro-periferia, en forma tal, que en los estados se repite una estructura vertical y centralista; donde la normatividad electoral también es trastocada por la obsesión de la centralización en un intento por adecuar las legislaciones locales a las reglas del juego bajo condicionamientos que la comodidad del régimen federal exigía. Y es que aun cuando se buscó dar pequeños pasos de apertura del régimen con las reformas electorales de 1946 y 1963, la discrecionalidad de los gobernadores para adecuar

¹⁹ Hernández Norzagaray, Ernesto (1997), *La liberalización política mexicana*, UAS, México, p. 128.

²⁰ Gobernador de Sinaloa (1969-1974).

²¹ Gobernador de Sinaloa (1975-1980).

²² Gobernador de Sinaloa (1981-1986).

dichas reformas a sus territorios hacía más lento y complicado aún, los procesos de cambio que los movimientos sociales harían fructificar con la reforma de 1977.

La transición a la democracia.

La emergencia de nuevos organismos, la erosión de la ideología revolucionaria y el fortalecimiento de las concepciones pluralistas; la intensificación de los reclamos que no podían procesarse a través de los viejos conductos; la presencia tácita de las derivaciones del movimiento del 68; las disputas encabezadas por el sindicalismo, y la movilización de universidades públicas, agrupaciones agrarias, de empresarios e incluso movimientos armados gestados en el campo y la ciudad, en contra de un ritual electoral que no recogía el presente social, que se traducían simple y llanamente en una institucionalidad incapaz de encauzar la realidad del país, donde los intermediarios predilectos entre la sociedad y el Estado, los partidos, eran insuficientes e inadecuados; fueron los catalizadores de la transición democrática en México, y como consecuencia, del impulso de una serie de modificaciones sustantivas se reproducían en las entidades federativas.

En el tomo 4 del ya clásico texto compilado por Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead, *Transiciones desde un gobierno autoritario*, se define transición como “el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro”,²³ acotando a la transición democrática “de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de

²³ O'Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe (1989), *Transiciones desde un gobierno autoritario*. 4. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, trad. Leandro Wolfson, T.4, Paidós, Argentina, p. 19.

democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria”.²⁴

A diferencia de la experiencia latinoamericana, la transición de México a la democracia tiene rasgos distintivos *sui generis* que merecen ser acuciosamente estudiados, pues vivió la estabilidad de su sistema político cuando las dictaduras del cono sur ganaban terreno en Argentina, Chile o Uruguay. No podemos hablar de una dictadura como tal, ni adjudicar el mismo impacto al derrumbe de los militares sudamericanos a la caída del partido hegemónico en México. La transición mexicana fue “pacífica, pactada y desde la Constitución”²⁵ propiciada por el detrimento del esquema de hegemonía mantenido por más de cinco décadas.

Pero ¿a qué se debe el desgaste del régimen autoritario? Al respecto, Przeworski, propone cuatro tipos de factores²⁶ que embonan en forma exacta con las causas del debilitamiento del régimen autoritario en nuestro país:

- a) El cumplimiento del régimen autoritario de las necesidades funcionales que llevaron a su establecimiento, y por lo tanto, pierde su carácter de necesario.
- b) La pérdida de legitimidad de régimen, por una u otra razón.
- c) Los conflictos existentes dentro del bloque gobernante, en particular entre los militares, no pueden conciliarse internamente por una u otra razón, ante lo cual ciertas facciones gobernantes deciden apelar al apoyo de grupos externos.
- d) Presiones externas que impulsan al régimen a “revestirse de una apariencia democrática”, lo que cataliza la transición.

²⁴ Ídem.

²⁵ Véase a Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldenberg, *op. cit.*

²⁶ “Algunos problemas en el estudio de las transiciones...”, en O'Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe, *op. cit.*, p. 84.

Tras ubicar el punto de partida de la transición como la erosión del régimen autoritario, es posible establecer el extremo opuesto de nuestro recorrido; “las transiciones democráticas terminan cuando se establecen, de manera efectiva, nuevas reglas democráticas. O más bien, concluyen cuando la institución central de la democracia liberal -las elecciones limpias, inclusivas y competitivas- se establece de manera efectiva”.²⁷

De esta manera y con la reforma electoral de 1997, se inaugura una serie de modificaciones a las condiciones de competencia de la lucha político-electoral, que cristalizaría con la inclusión de nuevos actores al sistema de partidos, y el fortalecimiento del sistema electoral; piezas angulares de la joven democracia mexicana.

Para O'Donnell, Schmitter y Whitehead “lo característico de una transición es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas. No sólo se hallan en flujo permanente sino que, además por lo general, son objeto de una ardua contienda. Los actores luchan no sólo por satisfacer sus intereses inmediatos y/o los de aquellos que dicen representar, sino también por definir reglas y procedimientos cuya configuración determinará probablemente quiénes serán en el futuro los perdedores y los ganadores”²⁸. A partir de este esquema, la transición puede ser estudiada en dos momentos: liberalización y democratización.

²⁷ Schedler, Andreas, “¿Por qué seguimos hablando de transición democrática en México?”, en Camou, Labastida y Luján, *Transición Democrática y Gobernabilidad. México y América Latina*, UNAM-Flacso-Plaza y Valdés, México, p. 21.

²⁸ O'Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe, *Op. cit.*, p. 20.

Liberalización, como primer paso de la transición en Sinaloa (1977-1991)

La liberalización, para Cansino, no es más que una “estrategia adaptativa”, distinta y distante de la democratización; ya que la discusión de las reglas del juego electoral se erige como una estrategia negociada. Es por ello que “la liberalización debe analizarse más en el ámbito de la continuidad que en el del cambio de régimen,”²⁹ esto es, su ubicación como relajación gradual y limitada de los cotos autoritarios.

La liberalización implica una apertura controlada, una flexibilización de los límites autoritarios impuestos para abrir las puertas al pluralismo y la competencia políticos, pero sin una extensión, ni el reconocimiento pleno de sus prerrogativas. En este contexto, Cansino propone un esquema que detalla a la liberalización³⁰:

- a) Las estructuras de autoridad de un régimen autoritario pueden iniciar un proceso de liberalización política cuando el nivel de legitimidad del régimen muestra una tendencia decreciente y cuando la movilización social conflictiva muestra una tendencia creciente.
- b) Cuando el impacto inicial del proceso de liberalización en la comunidad política es esencialmente positivo en términos del tipo de concesiones que establece y de las posibilidades de acción que se abren, se pueden producir en mayor o menor grado los siguientes efectos: 1) la participación política se incrementa, 2) la competencia política aumenta, 3) el riesgo de desestabilización del régimen autoritario disminuye.
- c) En casos en que el pluralismo se constituya en un factor de desequilibrio, el agravamiento de la crisis política del autoritarismo es más probable: la coalición dominante profundiza sus diferencias en beneficio de la oposición, y ésta logra mayor penetración y reconocimiento sociales, estando en condiciones, las más de las veces, de incorporar actores políticos provenientes de la propia coalición

²⁹ Cansino, César (2000), *La Transición Mexicana 1977-2000*, Cepcom, México, pág. 12.

³⁰ *Ibíd.*, pág. 61-63.

dominante o de otros grupos de interés. El avance electoral de la oposición, y la caída en este rubro del partido gubernamental, son indicadores de este proceso.

- d) La dinámica de la crisis autoritaria pone entonces en escena, en mayor o menor medida y con distintas combinaciones posibles, los siguientes hechos: una coalición dominante internamente dividida; un régimen atravesado por conflictos políticos abiertos o latentes, y con niveles de legitimidad y eficacia decisional decrecientes; la emergencia en la arena política institucional de uno o más interlocutores del régimen; un aumento considerable de la movilización social conflictiva. La democratización, ocurridos estos sucesos, comienza a percibirse como un desenlace factible.
- e) El agravamiento de la crisis autoritaria puede dar lugar a cualquiera de los siguientes desenlaces: el colapso del régimen, la transición continua o la reconstitución de la coalición dominante y la reconsolidación del régimen. El grado de institucionalización del autoritarismo y su oposición; el fortalecimiento o debilitamiento de la capacidad de presión política de las fuerzas de oposición; la disposición al acuerdo y a la negociación por parte de los actores políticos así como las presiones internacionales, son los factores que mayor peso tendrán en el resultado de la transición en movimiento.

En palabras llanas, la fase de liberalización se gesta por iniciativa de la élite autoritaria en un esfuerzo por mermar la crisis de legitimidad –por cualquiera de sus causas–, privilegiando los conductos institucionales sobre el uso de la fuerza; asegurando la oxigenación y estabilidad, por lo menos temporal, del régimen.

En México la liberalización política se materializó en las reformas electorales de 1977, 1986 y 1989-1990 mediante la constitucionalización de los partidos políticos, la introducción del principio de proporcionalidad a la Cámara de Diputados, la delimitación de las facultades de la Comisión Federal Electoral que serviría de plataforma al Instituto Federal Electoral, la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, para luego

convertirse en Tribunal Federal Electoral; la incorporación de fórmulas que aunque incipientes marcaban precedente en el reparto del financiamiento público; y los cambios en el padrón electoral y la nueva credencial de elector, por citar algunos.

En Sinaloa, la introducción de dichas innovaciones trastocó la organización y funcionamiento de:

EL SISTEMA DE ELECTORAL

Si la transición llegaría a Sinaloa de forma pacífica, como lo hizo a nivel nacional, tendría que ser desde sus leyes. Acompañada del vigor con el que se impulsó la reforma electoral federal de 1977, la Ley Electoral del Estado de Sinaloa de 1979³¹ suma a sus adecuaciones una nueva dirección en el desarrollo de los comicios locales a través de:

- El aumento de sus distritos electorales uninominales (pasó de 18 a 23).
- La inclusión de 6 diputados de representación proporcional al Congreso local. Con la exigencia a los partidos aspirantes de participar en cuando menos 6 distritos electorales, que no hayan alcanzado 4 o más constancias de mayoría relativa, así como la obtención como mínimo del 2.5% de la votación total.
- Deja a la Comisión Estatal Federal la facultad para determinar la fórmula de representación proporcional para las listas estatales y municipales.
- Sólo reconocía la personalidad jurídica a los partidos nacionales y locales con registro definitivo.
- Refrenda el derecho de los partidos de integrar las comisiones electorales con representantes con voz y voto.
- Establece la equidad en la asignación de recursos para las campañas.
- Detalla las figuras de los frentes y coaliciones.

³¹ Véase a Urcisichi Arellano, Óscar (Comp.)(2006), *Leyes Electorales de Sinaloa. Compendio histórico*, CEE-UAS, México

- Reconoce la organización de las elecciones como una atribución de la Comisión Estatal Electoral.
- El cómputo de las elecciones de diputados le corresponde a las comisiones distritales en tanto que su calificación, le corresponde al Congreso. El cómputo general de las elecciones de gobernador y diputados de representación proporcional está a cargo de la Comisión Estatal Electoral. La calificación le corresponde al Congreso del Estado. El ayuntamiento en funciones califica las elecciones municipales, computadas por las comisiones electorales municipales.

A esta Ley siguieron las reformas de 1980 que modificó el período de registro de los candidatos, la de 1983 que redistribuyó con motivo de la creación del municipio de Navolato; y las dos publicadas en 1989: la primera, reduce el porcentaje de 10 a 5% para tener acceso a los regidores de representación proporcional, la segunda, incorpora la regulación de las asociaciones políticas estatales y el reconocimiento de las nacionales.

En medio de las adiciones y correcciones realizadas a los marcos legales federales y locales de esta primera etapa de la transición; el avance más significativo se encuentra en primer lugar, en la ciudadanización de la Comisión Estatal Electoral garantizada con la salida del Secretario General de Gobierno como Presidente del organismo efectuada desde la reforma a la Ley Electoral del Estado en 1989³². Así como la creación del primer vestigio de justicia electoral en el Estado en la denominación del Tribunal Estatal de lo Contencioso Electoral, figura establecida en la Ley Electoral de Sinaloa de 1989, y que a pesar de ser considerado en dicho texto “un apoyo del Colegio Electoral del

³² Artículo 57° de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa en 1989.

Congreso y de los Ayuntamientos”³³, en un contexto donde priva la calificación política sobre la calificación jurisdiccional, representa un ente de avanzada.

EL SISTEMA DE PARTIDOS

Tras la publicación de la ley electoral de 1979 que no sólo trataba de ensanchar las libertades, sino de modificar el mapa de la representación política en el estado, mediante la apertura de la escena política a nuevos actores a través del criterio de proporcionalidad; dio inicio una operación preventiva del régimen autoritario para pasar de un Estado de partido hegemónico a un Estado de partidos.

Y las nuevas ofertas políticas llegaron a Sinaloa. Las elecciones de 1980, aunque seguían siendo fiel reflejo de avasallamiento electoral del PRI sobre una oposición meramente presencial, abonaban solidez al proyecto de pluralismo político. Prueba de ello es que las elecciones locales de 1980, 1983, 1986 y 1989, correspondientes a la etapa de liberalización sinaloense, se convirtieron en amplios espacios de concurrencia partidaria, aunque contrastados con los altos índices de abstencionismo que fluctúan entre un poco menos del 50% y el 63%. Ello denota la debilidad de los nuevos institutos políticos en competencia para conquistar la participación del ciudadano sinaloense propiciada por marcados vicios, componendas y situaciones de inequidad en la contienda, como prácticas básicas en la manutención del *status quo* de un régimen que se debate entre la legitimidad y la pérdida del control.

Las disparidades en el otorgamiento del financiamiento público, la falta de contundencia en la fijación de los topes de campaña, el uso de la estructura gubernamental a favor

³³ Artículo 223° de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa en 1989.

del candidato del partido oficial, y la sospecha del fraude en torno a los resultados electorales, eran sólo algunos de los obstáculos a lo que se enfrentaba la instauración de la democracia en Sinaloa, como en el resto del país. En la siguiente tabla se muestran los resultados electorales locales registrados en Sinaloa durante el período aquí denominado como liberalización política, misma que presenta avances importantes en la desconcentración de las preferencias electorales, y una mayor apertura del abanico ideológico en la entidad.

TABLA 1.1 RESULTADOS ELECTORALES DEL PERÍODO DE LIBERALIZACIÓN POLÍTICA EN SINALOA (1977-1991)

PARTIDO POLÍTICO		AÑO DE LA ELECCIÓN							
		1980		1983		1986		1989	
		VOTOS ABSOLUTOS	VOTOS RELATIVOS	VOTOS ABSOLUTOS	VOTOS RELATIVOS	VOTOS ABSOLUTOS	VOTOS RELATIVOS	VOTOS ABSOLUTOS	VOTOS RELATIVOS
PAN		24,244	8.64	134,608	27.73	142,469	25.83	99,700	25.69
PRI		235,010	83.72	312,149	64.32	390,281	70.73	261,931	67.50
PCM a PRD		7,041	2.51	32,749	6.75	11,839	2.14	15,701	4.05
OTROS	PDM	767	0.27	1,363	0.28				
	PARM	9,175	3.27			1,177	0.21	2,951	0.76
	PST	858	0.30			2,809	0.51		
	PFCRN							3,370	0.87
	PPS	3,624	1.29	3,527	0.73	3,190	0.58	3,219	0.83
	PRT			931	0.19				
	PFIN							1,155	0.30
VOTOS EFECTIVOS		280,719	100.00	485,327	100.00	551,765	100.00	388,027	100.00
VOTOS NO REGISTRADOS		0		0		0		0	
VOTOS ANULADOS		0		0		0		0	
TOTAL	TOTAL DE VOTOS	280,719	100.00	485,327	100.00	551,765	100.00	388,027	100.00
	LISTA NOMINAL	685,682	100.00	944,768	100.00	1,072,164	100.00	1,073,557	100.00
ABSTENCIONISMO		404,963	59.06	459,441	48.63	520,399	48.54	685,530	63.86

** Elaboración propia con base en los resultados de las elecciones locales de Diputados por el principio de mayoría relativa. FUENTE: Peschard, Jacqueline (Coord.), *op.cit*

A partir de los datos anteriores es posible obtener una serie de indicadores que nos permitan comprender las variaciones ocurridas en el período en cuestión. Tal es el caso del índice de fragmentación electoral, que como puede apreciarse en la tabla 1.2, aumenta en razón proporcional al número efectivo de partidos especialmente en el primer intervalo de elecciones, ello en correspondencia con el incremento de las votaciones de los pequeños partidos también denominados paraestatales. Para 1983 puede hablarse ya de un bipartidismo, a diferencia de la preeminencia del sistema de partido y medio de 1980. Además, es necesario mencionar el peso de la volatilidad electoral del primer intervalo (1980-1983) en la reconstrucción de los comportamientos electorales es elocuente: el 21.26% de la votación efectiva se trasladó a otro partido. Sin embargo, también es evidente que aunque el PAN ha acrecentado la sumatoria de su votación, los niveles de competitividad aún son considerados como “muy bajos”.

De análisis como los antes expuestos podemos inferir que aun cuando la puerta ha sido entreabierta para participar en el juego electoral, y el diseño de las reglas ha sido paulatinamente modificado; la influencia de los gobernadores y las condiciones *de facto* todavía resultan adversas para los nuevos integrantes de este subsistema político.

TABLA 1.2 INDICADORES DEL PERÍODO DE LIBERALIZACIÓN POLÍTICA EN SINALOA (1977-1991)

INDICADORES	AÑO DE LA ELECCIÓN			
	1980	1983	1986	1989
ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN ELECTORAL DE RAE	0.29	0.5	0.43	0.48
NÚMERO EFECTIVO DE PARTIDOS	1.4	2	1.8	1.9
VOLATILIDAD ELECTORAL	21.65		3.04	
COMPETITIVIDAD ELECTORAL	MUY BAJA	MUY BAJA	MUY BAJA	MUY BAJA

** ** Elaboración propia con base en los resultados de las elecciones locales de Diputados por el principio de mayoría relativa. FUENTE: Peschard, Jacqueline (Coord.), *op.cit*

Democratización. La transición se apuntala en Sinaloa (1992-1995).

La democratización puede precisarse como la ampliación de los derechos políticos y civiles provista por un acuerdo o pacto entre todas las fuerzas políticas actuantes, cuyo desenlace constituye la instauración de un arreglo institucional con normas y valores auténticamente democráticos.

Atendiendo a la caracterización de la democratización como progresión que apuntala el terreno ganado por la liberalización a favor de la democracia; Przeworski propone una serie de pautas que facilitan su reconocimiento³⁴:

- a) Se registra como una característica permanente de la actividad política en razón de la existencia de intereses antagónicos y de la tendencia de la organización a satisfacerlos.
- b) Los conflictos se procesan con reglas especificadas *a priori*, explícitas y potencialmente familiares para todos los participantes. Dichas reglas establecen: 1) los criterios para que alguien pueda ser admitido como participante político; 2) los cursos de acción que constituyen estrategias admisibles, y 3) los criterios por los cuales se pone término a los conflictos.
- c) Determinados cursos de acción son excluidos como estrategias admisibles, en el sentido de que en caso de que un grupo cualquiera recurra a ellos puede usarse legítimamente la fuerza física organizada de manera permanente.
- d) La democracia constituye un conjunto de relaciones estables entre las acciones de grupos determinados, incluyendo los efectos que estas acciones tienen sobre ellos.
- e) Dado que cada participante, cualquiera que sea su modalidad: individual o colectivo, puede optar entre varias estrategias; en una democracia los resultados de los conflictos son, en cierta medida, indeterminados respecto de las posiciones que ocupan los participantes en todas las relaciones sociales, incluidas las relaciones de producción.

³⁴ "Algunos problemas en el estudio de las transiciones...", en O'Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe, *op. cit.*, p. 93-96.

- f) Los resultados de los conflictos democráticos no están simplemente indeterminados dentro de ciertos límites, sino que además son inciertos. Puesto que cualquier organización de conflictos constituye un ordenamiento de los desenlaces de las acciones, a cada arreglo institucional se le asocia una distribución de la probabilidad de que los conflictos desemboquen en resultados determinados.

En la etapa democratizadora se busca crear las condiciones ambientales y funcionales para que la democracia se consolide, es decir, para que ésta goce de una legitimación generalizada. Con base en este objetivo, el paso de la democratización en Sinaloa dejó la herencia más representativa de la institucionalización electoral: el Consejo Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral, hecho complementado con un importante crecimiento en la rentabilidad electoral de la oposición y contrastes en los niveles de participación.

EL SISTEMA ELECTORAL

La Ley Electoral de Sinaloa de 1979 sería reemplazada por la de 1992, y esta a su vez, reformada en 1995 y 1998; teniendo como telón de fondo los arreglos constitucionales y legales de 1993 y 1994 realizados a la normatividad federal y caracterizados por la introducción de equidad a la competencia comicial.

La Ley Electoral de Sinaloa de 1992 abunda, entre otras cosas, sobre:

- El aumento de los diputados de representación proporcional (pasaron de 6 a 16).
- El establecimiento del 2.5% de la votación emitida para el reparto proporcional.
- La regulación de la constitución de los partidos políticos estatales.
- El financiamiento es regulado de una forma más clara. El público financiamiento se otorgará para el año de la elección y los dos posteriores.
- Prevalece la calificación del Colegio Electoral.

- La renovación del órgano electoral: el Consejo Estatal Electoral; integrado por un presidente y siete consejeros electorales nombrados por el Congreso de una lista enviada por el gobernador y propuesta por los partidos políticos. En su artículo 47° esta Ley, dispuso que la organización de las elecciones fuera una función estatal ejercida por un conjunto de cuatro instituciones: El Consejo Estatal Electoral, como órgano superior de dirección; los consejos distritales, los consejos municipales y las mesas directivas de casilla.
- El Tribunal de lo Contencioso Electoral dejó de existir, toma su lugar el Tribunal Estatal Electoral; integrado por tres magistrados numerarios y dos supernumerarios, que serían nombrados por el Congreso del Estado a propuesta del Gobernador. Es definido como un órgano jurisdiccional autónomo en su materia y facultado para resolver los recursos que se presenten.

El tramo hasta aquí andado permite identificar la afirmación de una nueva perspectiva innovadora en el formato institucional, suficiente para resolver los conflictos que el aumento de la competencia trajo consigo. Se ha liberado ya, de manera contundente, al árbitro electoral en su composición y funciones de las ataduras gubernamentales que mermaban los principios de imparcialidad, legalidad y autonomía en la organización de las elecciones, para sustituirlo con la certeza que brinda participación meramente ciudadana en la conducción del mismo aunada a la inclusión de la representación partidaria.

Pero si el Consejo Estatal Electoral pareciera un aliento al sufragio, el Tribunal Estatal Electoral se posiciona como un complemento en la defensa del mismo. Se abre una nueva etapa en el capítulo de la justicia electoral del Estado. Sinaloa suma otra garantía a su moldura institucional, con facultades cada vez más amplias para dirimir conflictos cada vez más comunes en un estado que estaba inyectando, a través del voto, pluralidad a las urnas.

EL SISTEMA DE PARTIDOS

En 1995, aprovechando la ola de las facturas por cobrar al Revolucionario Institucional por los saldos negativos del gobierno salinista, "... la estrategia panista de ir desde los centros urbanos hacia los rurales —a la par de la nacional, que va de los municipios a los estados y de ahí al centro del país— sugirió que el círculo de esta dinámica estaba cerrándose. Los triunfos de este partido en Ahome, Culiacán, Mazatlán, Navolato y Salvador Alvarado, donde se encuentra el 64.3% de la población del estado"³⁵ son un claro ejemplo del avance de la oposición en Sinaloa, que adquiere una doble importancia por tratarse del poder ejecutivo de los municipios.

Los porcentajes de abstencionismo se reducen notablemente en este período (elecciones de 1992 y 1995) con respecto al anterior. Las cifras de votación siguen una trayectoria de acercamiento entre el PRI y el PAN, a tal grado que en los comicios de 1995 sólo los separa poco más del 4%, desplazándose de un índice de competencia "muy bajo", a uno "muy alto". Además el PRD presenta un incremento de su votación en casi 8 puntos porcentuales, lo que repercute en el número efectivo de partidos y configura un tripartidismo en Sinaloa, hecho aunado a un índice de fragmentación que muestra la tendencia de la población a votar por un partido distinto. A ello hay que agregar que la volatilidad del período en cuestión indica que el 15.42% de la votación se desplazó a otros partidos.

³⁵ Hernández Norzagaray, Ernesto (1995), "Los apoyos electorales a los partidos políticos: Sinaloa 1995", en Larrosa y Valdés, *Elecciones y partidos políticos en México, 1995*, UAM, México, p. 157-162

TABLA 2.1 RESULTADOS ELECTORALES DEL PERÍODO DE DEMOCRATIZACIÓN POLÍTICA EN SINALOA (1992-1995)

PARTIDO POLÍTICO		AÑO DE LA ELECCIÓN			
		1992		1995	
		VOTOS ABSOLUTOS	VOTOS RELATIVOS	VOTOS ABSOLUTOS	VOTOS RELATIVOS
PAN		183,737	33.15	290,357	40.35
PRI		329,157	59.39	316,744	44.02
PRD		28,907	5.21	96,894	13.47
PT				10,675	1.48
PVEM				4,889	0.68
OTROS	PARM	5,535	1.00		
	PFCRN	2,514	0.46		
	PPS	4,389	0.79		
VOTOS EFECTIVOS		554,239	100.00	719,559	100.00
VOTOS NO REGISTRADOS		0		0	
VOTOS ANULADOS		0		0	
TOTAL	TOTAL DE VOTOS	546,190	100.00	719,559	100.00
	LISTA NOMINAL	930,390	100.00	1,369,536	100.00
ABSTENCIONISMO		384,200	41.29	649,977	47.46

** Elaboración propia con base en los resultados de las elecciones locales de Diputados por el principio de mayoría relativa. FUENTE: CEE-Sinaloa.

TABLA 2.2 INDICADORES ELECTORALES DEL PERÍODO DE DEMOCRATIZACIÓN POLÍTICA EN SINALOA (1992-1995)

INDICADORES	AÑO DE LA ELECCIÓN	
	1992	1995
ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN ELECTORAL DE RAE	0.53	0.63
NÚMERO EFECTIVO DE PARTIDOS	2.1	2.7
VOLATILIDAD ELECTORAL	15.42	
COMPETITIVIDAD ELECTORAL	MUY BAJA	MUY ALTA

** ** Elaboración propia con base en los resultados de las elecciones locales de Diputados por el principio de mayoría relativa. FUENTE: CEE-Sinaloa.

Consolidación. Hacia la preservación del régimen democrático.

Los esfuerzos por consolidar la democracia requieren situarnos en el lugar y el espacio donde la democracia y la gobernabilidad pueden encontrar una convivencia con posibilidades de fraguarse. Para Przeworski, y atendiendo a la teoría de juegos, una democracia está consolidada “cuando los perdedores sólo quieren volver a probar suerte en el marco de las mismas instituciones en cuyo contexto acaban de perder. Así, un régimen político democrático estará consolidado cuando el acatamiento -la actuación en el marco institucional- constituye el punto de equilibrio de las estrategias descentralizadas de todas las fuerzas políticas involucradas”.³⁶

De lo anterior podemos aseverar que la consolidación democrática, implica el proceso de institucionalización de las reglas del juego político, en el sentido de que éstas han sido internalizadas por los diferentes actores, volviéndolas más sólidas, estables y previsibles. En un sentido amplio, la consolidación democrática designa el proceso mediante el cual las instituciones democráticas pueden permanecer en el tiempo y en el espacio en un contexto político y económico determinado. En sentido restringido, el vocablo demanda, y supone, la construcción de instituciones fuertes y democráticas, la expansión de la legitimidad del régimen y la responsabilidad de los actores políticos involucrados en el proceso democrático. De cualquier forma, ambas visiones confluyen en lo que Schedler califica como “el desafío 'negativo' de prevenir la erosión democrática y la regresión a lo anterior, al mismo tiempo que, el desafío 'positivo' de

³⁶Przeworski, A. (1999), “Democracia y Mercado” Lindblom, Charles, *Democracia y Sistemas de Mercado*, FCE, CNCPyAP, UAEH, México, pp. 42 y *passim*.

completar la democracia”.³⁷ Esto es lo que O'Donnell ha llamado una “segunda transición”: el tránsito de un gobierno democrático a un régimen autoritario.³⁸

La consolidación democrática, por tanto, hace necesaria la tarea de edificar un sistema coherente de reglas y prácticas que vinculen, de modo democrático y multidimensional, a las élites gobernantes con la sociedad. Consolidación democrática, deviene un sinónimo de construcción institucional (partidos y sistemas de partidos, cuerpos legislativos, burocracias estatales, sistemas judiciales, sistemas de intermediación, etc.), ahí donde las instituciones aluden a patrones de conducta entrelazados y entrelazantes.

La consolidación democrática, señalan Linz y Stepan, no será exitosa en tanto los siguientes requisitos no sean cubiertos: una sociedad civil activa e independiente; una sociedad política con suficiente autonomía; un consenso de trabajo acerca de los procedimientos gubernamentales, el constitucionalismo y el imperio de la ley; una burocracia de la que puedan hacer uso los líderes democráticos; y una sociedad económica institucionalizada.

El proceso de consolidación democrática en Sinaloa ha seguido dos rutas convergentes: la primera, hacia la renovación de los instrumentos jurídicos de su esquema electoral que brinden certeza a los procesos de renovación de los puestos de elección popular, y la segunda, con dirección a la promoción de un sistema de partidos competitivo e incluyente que se derive de condiciones de competencia equitativas, y del sustento de proyectos políticos atractivos para el electorado.

³⁷ *Ibíd.*, p. 98.

³⁸ *Ibíd.*, p. 112.

EL SISTEMA ELECTORAL

Con la última modificación hecha en 1998, en la que se reestructuró y ampliaron las facultades del Tribunal Estatal Electoral, la legislación electoral local inició en Sinaloa el período de elecciones que denominaremos consolidación democrática (1998, 2001, 2004, 2007). Sería hasta 2006, cuando la entidad contase con una ley que correspondiera con las necesidades generadas en la arena electoral en razón de las relaciones de acentuada competitividad.

La nueva Ley electoral prevé:

- La regulación de las precampañas, figura no contemplada antaño y generadora de conflictos de incidencia directa en las campañas ante la ausencia de límites temporales y financieros. Su duración será de 45 días, y terminarán un día antes del plazo para el registro oficial de los candidatos (a diputados, gobernador, o presidentes municipales).
- Un período de veda electoral entre el registro y el inicio oficial de las campañas, en el que los candidatos y partidos se abstendrán de realizar actividades de proselitismo.
- Las campañas se acortan a 60 días, pues las elecciones se celebrarán el segundo domingo del mes de octubre. Esta reducción de los tiempos y topes financieros implica también una reducción del financiamiento público y privado a los partidos y candidatos.
- Se recoge por primera vez en una reforma electoral en el país el planteamiento de la contratación de publicidad en los medios de comunicación electrónicos e impresos a través del órgano electoral. Es importante destacar que hasta 2006 no pueden encontrarse antecedentes similares en otras legislaciones en materia electoral; sólo superada por la reforma electoral federal de 2007.
- Asimismo, se reestructura al Consejo Estatal Electoral disminuyendo el número de sus consejeros de 8 a 6.

Incluso con adecuaciones de vanguardia, el sistema electoral sinaloense conserva algunos escollos que han restado consistencia a su consolidación como democracia emergente, entre ellos se encuentra la necesidad de una redistribución que garantice el principio de “una persona un voto”, la eliminación de la cláusula de gobernabilidad; y la manutención de minorías artificiales en el Congreso a través del mecanismo de proporcionalidad operado desde el porcentaje mínimo³⁹.

EL SISTEMA DE PARTIDOS

A la par de los arreglos normativos minúsculos en primera instancia y de grandes dimensiones a partir de la reforma de 2006, el sistema de partidos en Sinaloa experimenta reacomodos en razón de la dinámica política que dotaba a la oposición cada vez de más fuerza con niveles de abstencionismo fluctuantes entre el 38% y el 52%.

Como puede observarse en la tabla 3.1, durante este lapso se han presentado fenómenos coyunturales que merecen ser reservados para su posterior reflexión. En 2001, por ejemplo, en su primera elección el Partido Barzonista Sinaloense⁴⁰ obtuvo más de 22 mil votos, aunque para la elección de 2004 su votación disminuyó en un 70%. De manera similar ocurrió en la reñida elección de 2004, que dicho sea de paso, coincidió con la renovación de la gubernatura, cuya diferencia PRI-PAN fue de 2.83% en la elección de diputados y de 1.2% en la elección de gobernador⁴¹. Sin embargo, debe precisarse que debido a la naturaleza de los comicios, las elecciones del

³⁹ Véase a Valdez, Reyna Guadalupe (2006), “Retos de la reforma electoral en Sinaloa”, en *Las Instituciones de la democracia*, CEE-Sinaloa, México. pp. 119-133.

⁴⁰ Formado en 2000, a partir del movimiento de deudores de la Banca.

⁴¹ Contendieron por el PRI, Jesús Alberto Aguilar Padilla; y Heriberto Félix Guerra por el PAN.

Congreso resultan ser, en los casos estudiados, menos atractivas para el elector que la renovación del ejecutivo estatal.

TABLA 3.1 RESULTADOS ELECTORALES DEL PERÍODO DE CONSOLIDACIÓN POLÍTICA EN SINALOA (1992-1995).

PARTIDO POLÍTICO		AÑO DE LA ELECCIÓN							
		1998		2001		2004		2007	
		VOTOS ABSOLUTOS	VOTOS RELATIVOS	VOTOS ABSOLUTOS	VOTOS RELATIVOS	VOTOS ABSOLUTOS	VOTOS RELATIVOS	VOTOS ABSOLUTOS	VOTOS RELATIVOS
PAN		263,611	31.20	229,301	29.21	350,934	42.02	308,798	36.87
PRI		387,465	45.85	373,312	47.55	374,531	44.85	430,229	51.37
PRD		154,696	18.30	86,485	11.02	66,932	8.01	62,346	7.44
PT		12,443	1.47	49,225	6.27	19,944	2.39	15,171	1.81
PVEM		8,836	1.05	6,071	0.77	7,582	0.91	11,343	1.36
CONVERGENCIA						7,694	0.92	5,924	0.71
ALTERNATIVA								3,688	0.44
OTROS	CD	5,077	0.60	5,077	0.65				
	PSN	3,574	0.42	3,574	0.45				
	PAS	8,894	1.05	8,894	1.13				
	PBS			22,591	2.88	7,526	0.90		
	APSI	547	0.06	547	0.07				
VOTOS EFECTIVOS		845,143	100.00	785,077	100.00	835,143	100.00	837,499	100.00
CANDIDATURAS COMUNES				8,908		289		1,071	
COALICIONES						53,701			
VOTOS NO REGISTRADOS		203		828		873		704	
VOTOS ANULADOS		16,088		18,294		16,928		16,080	
TOTAL	TOTAL DE VOTOS	861,434	100.00	813,107	100.00	906,934	100.00	855,354	100.00
	LISTA NOMINAL	1,416,255	100.00	1,544,363	100.00	1,655,160	100.00	1,780,928	100.00
ABSTENCIONISMO		554,821	39.18	731,256	47.35	748,226	45.20	925,547	51.97

** Elaboración propia con base en los resultados de las elecciones locales de Diputados por el principio de mayoría relativa. FUENTE: CEE-Sinaloa.

En la tarea de esquematizar el tejido del sistema de partidos en Sinaloa durante este período, el número efectivo de partidos expresa un tripartidismo en el intervalo de elecciones 1998-2001; mientras que se reduce a un bipartidismo y medio en el que comprende de 2004-2007. A ello debemos agregar que la fragmentación electoral dibuja una disminución en este segundo intervalo, debido a la reducción del número de partidos en el plano nacional y a la desaparición de los partidos estatales.

En términos de competitividad, las cifras oscilan entre los rangos: “media” y “baja”, con un repunte en la elección de 2004 que puede considerarse “muy alta”. En este sentido, la volatilidad electoral disminuye con respecto al período de liberalización, sosteniéndose por debajo de los 10 puntos porcentuales, es decir, no hubo un desplazamiento ingente de los votos, entre los intervalos en cuestión, no obstante, podría calcularse un tercer intervalo (2001-2004) donde se produce una reducción del número de partidos y la confluencia de otros factores que hicieron crecer al PAN en 13 puntos porcentuales. Para 2007, el PRI experimenta una recuperación notoria de más de 5 puntos porcentuales; con base en los indicadores antes descritos, esa recuperación hace que la fragmentación del poder disminuya, ubica al índice de competitividad como “media”, decrezca el número efectivo de partidos y retroceda la volatilidad electoral, mediante la prevención de la fuga de votos de sus bastiones.

TABLA 3.2 INDICADORES ELECTORALES DEL PERÍODO DEMOCRATIZACIÓN POLÍTICA EN SINALOA (1992-1995)

INDICADORES	AÑO DE LA ELECCIÓN			
	1998	2001	2004	2007
ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN ELECTORAL DE RAE	0.68	0.67	0.62	0.59
NÚMERO EFECTIVO DE PARTIDOS	3.1	3	2.6	2.4
VOLATILIDAD ELECTORAL	8.23		6.74	
COMPETITIVIDAD ELECTORAL	MEDIA	BAJA	MUY ALTA	MEDIA

** Elaboración propia con base en los resultados de las elecciones locales de Diputados por el principio de mayoría relativa. FUENTE: CEE-Sinaloa.

Conclusiones.

Sinaloa, aún en proceso de consolidación democrática, es el resultado de la conjugación de elementos de cambio continuo. Prueba de ello, es que a partir de la

visión panorámica que ofrece la periodización de su desarrollo es posible concluir que nada ha permanecido inamovible en el estado, a pesar de la fase germinal de nuestra democracia. De allí que tras delimitación de períodos en el desarrollo de la democracia en Sinaloa pueda ubicarse en primer término, una etapa de régimen autoritario que comprende desde la instauración de los gobiernos postrevolucionarios y hasta 1976, año en que inician los trabajos de la reforma electoral de 1977, reforma que marca el inicio de la transición mexicana y que a su vez permeó en el estado en dos momentos: la liberalización (1977-1991) caracterizada por una ampliación de las libertades individuales y la apertura del régimen a la participación de nuevos actores; y la democratización (1992-1995) etapa donde se construyen garantías de protección de dichas libertades, y condiciones de equidad para la competencia electoral; y finalmente, una etapa de consolidación, iniciada en 1995 y distinguida por una creciente dinamización de la competitividad, y alternancias en los municipios, etapa donde nos ubicamos y que habrá de prolongarse, en palabras de Leonardo Morlino, “hasta el logro de la ampliación significativa la legitimidad del régimen”⁴².

Si bien es cierto que, los cambios en materia democrática de Sinaloa han sido lentos y casi imperceptibles en las etapas antes descritas, también lo es que, dichos cambios constituyen las unidades de su desarrollo, y la reflexión en torno a ellos permite ubicar la trayectoria no lineal de la construcción de la democracia en nuestro estado.

REGUVA

⁴² Morlino, Leonardo (2003). *Consolidación democrática. Definición, modelo, hipótesis*. Cit. en *Diccionario Electoral*. Tomo I, tercera edición, IFE-UNAM, México.

Bibliografía

- Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldenberg (2000), *La Mecánica del Cambio Político en México. Elecciones, partidos y reformas*, Cal y Arena, México.
- Bovero, Michelangelo (2000), *Democracia, alternancia, elecciones*, IFE, México.
- Cansino, César (2000), *La Transición Mexicana 1977-2000*, Cepcom, México.
- Córdova, Arnaldo (1972), *La Formación del Poder Político en México, Era*, México.
- Dahl, Robert A. (2006), *La democracia. Una guía para los ciudadanos*, Taurus, México.
- García Ramírez, Guadalupe y Gutiérrez, Jesús Ramón (2004), *Partidos políticos y movimientos sociales en Sinaloa, 1929-1940*, CEE-UAS, México.
- Hernández Norzagaray, Ernesto (1995), "Los apoyos electorales a los partidos políticos: Sinaloa 1995", en Larrosa y Valdés, *Elecciones y partidos políticos en México, 1995*, UAM, México.
- Hernández Norzagaray, Ernesto (1997), *La liberalización política mexicana*, UAS, México.
- Linz, Juan (1974), "Una Teoría del Régimen Autoritario. El caso de España", en Fraga, M., *et al.*, *La España de los 70*, vol. III, *El Estado y la Política, Moneda y Crédito*, España.
- Morlino, Leonardo (2003). *Consolidación democrática. Definición, modelo, hipótesis*. Cit. en *Diccionario Electoral*. Tomo I, tercera edición, IFE-UNAM, México.
- Nohlen, Dieter (2003), *El contexto hace la diferencia: reformas constitucionales y el enfoque histórico-empírico*, segunda edición, UNAM, México.
- Nohlen, Dieter (2004), *Sistemas electorales y partidos políticos*, tercera edición, Fondo de Cultura Económica, México.
- O'Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe (1989), *Transiciones desde un gobierno autoritario. 4. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, trad. Leandro Wolfson, T.4, Paidós, Argentina.
- Ortega Noriega, Sergio (1999), *Breve Historia de Sinaloa*, FCE-Colegio de México, México.
- Paz, Octavio (2001), "Hora cumplida (1929-1985)", en Octavio Paz. *Sueño en libertad. Escritos políticos*, selección y prólogo de Yvon Grenier, Seix Barral, México.
- Peschard, Jacqueline (Coord.) (2008), *El federalismo electoral en México*, Miguel Ángel Porrúa/Cámara de Diputados/UNAM, México.
- Przeworski, A. (1999), "Democracia y Mercado" Lindblom, Charles, *Democracia y Sistemas de Mercado*, FCE, CNCPyAP, UAEH, México.
- Sartori, Giovanni (2005), *Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis*, trad. Fernando Santos Fontenla, segunda edición ampliada, Alianza Editorial, España.
- Schedler, Andreas (2000), "¿Por qué seguimos hablando de transición democrática en México?", en Camou, Labastida y Luján, *Transición Democrática y Gobernabilidad. México y América Latina*, UNAM-Flacso-Plaza y Valdés, México.
- Urcisichi Arellano, Óscar (Comp.) (2006), *Leyes Electorales de Sinaloa. Compendio histórico*, CEE-UAS, México.
- Valdez, Reyna Guadalupe (2006), "Retos de la reforma electoral en Sinaloa", en *Las Instituciones de la democracia*, CEE-Sinaloa, México.